

DE LAS ARMAS A LAS URNAS: PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR. APORTES PARA EL ANÁLISIS DEL CASO COLOMBIANO 1982-2010*

FROM ARMS TO VOTE: PEACE PROCESS IN EL SALVADOR. CONTRIBUTIONS FOR THE ANALYSIS OF THE COLOMBIAN CASE 1982-2010

*José David Moreno***

Fecha de recepción: 14/3/2016

Fecha de aprobación: 16/5/2016

Resumen

El presente artículo realiza en un primer momento una descripción de los eventos que contribuyeron a la configuración del conflicto armado en El Salvador a lo largo del siglo xx. De igual forma se analizan tanto la construcción del proceso de paz así como el periodo de posconflicto. Posteriormente se hace un esbozo de la

* Artículo de investigación científica, que analiza la construcción del proceso de Paz y el periodo de posconflicto en el Salvador, realizando una mirada prospectiva sobre el proceso de paz en Colombia.

** Historiador, magíster en Relaciones Internacionales con estudios de doctorado en Ciencia Política. En la actualidad es profesor asociado del programa de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde hace dos años participa en el equipo interdisciplinario del observatorio de paz de la misma universidad. Allí se ha venido trabajando los aportes y las experiencias de los casos centroamericanos al proceso de paz en Colombia. Este artículo es fruto de la investigación desarrollada al interior de este grupo desde 2014. Correo electrónico: josed.morenom@utadeo.edu.co

situación colombiana alrededor de los diversos esfuerzos por llegar a la paz, por medio de un acuerdo entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Gobierno salvadoreño. Finalmente, se hace un análisis prospectivo y comparativo apoyándonos en los aportes y las múltiples experiencias del caso salvadoreño, a partir de entrevistas con Salvador Samayoa, representante del Frente en las negociaciones y Óscar Santamaría, representante del Gobierno Cristiano. La experiencia del país centroamericano ofrece un número significativo de enseñanzas que Colombia debería tener muy en cuenta. De allí la importancia de tener presente todas las etapas vividas por El Salvador y de esa forma apreciar la aplicabilidad al caso colombiano partiendo del principio de que la paz es un punto de partida antes que ser un punto de llegada. Entendiendo igualmente que la paz se construye y en esa construcción participan todas las fuerzas sociales de la nación.

Palabras clave

El Salvador, violencia, conflicto armado, proceso de paz, construcción de paz, mantenimiento de paz, Colombia.

Abstract.

This article provides a description of the events that contributed to the shaping of the armed conflict in El Salvador throughout the twentieth century at first. Similarly both the construction of the peace process and the post-conflict period are analysed. Subsequently an outline of the Colombian situation around the various efforts to reach peace is made. Finally a prospective and comparative analysis based on inputs and multiple experiences of the Salvadoran case is made. The experience of the Central American country offers a significant number of lessons that Colombia should take into account. Hence the importance of having all stages experienced by

El Salvador and thus appreciate the applicability to the Colombian case based on the principle that peace is a starting point rather than being a point of arrival. Also understanding that peace is built and that building involves all the social forces of the nation.

Keywords

El Salvador, violence, armed conflict, peace process, peace building, peace keeping, Colombia

A modo de introducción: de la guerra y la paz en El Salvador¹

El Salvador es el país más pequeño de la región centroamericana, además de ser el único país que no posee costa atlántica. Atada históricamente al pasado del virreinato de la nueva España, El Salvador estuvo ligado constantemente a los destinos de Guatemala y, de alguna manera, los de México en los albores de la independencia. Corriendo el siglo xix, El Salvador conformó, junto con cuatro repúblicas hermanas la famosa Provincia Unida de Centro América. Ejercicio temporal y de transición que iba mostrando la conformación de las nuevas repúblicas centroamericanas. Estas repúblicas están cubiertas por casi un centenar de volcanes que a su vez dan como resultado suelos altamente fértiles. Justamente esta riqueza de la tierra la que le va a dar a El Salvador su vocación agraria concentrada especialmente en el café desde finales del siglo xix.

La economía del café impulsa la necesidad de un país moderno en El Salvador hasta antes de 1930. A pesar de que la economía

1 Este artículo es fruto de los procesos investigativos del observatorio de paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde hace tres años venimos trabajando en las experiencias internacionales y lo aportes al caso colombiano. Este artículo es fruto de esos trabajos. Esta investigación resulta de un trabajo basado en investigaciones de campo realizadas tanto en El Salvador como en Colombia. También se apoya en una importante base de libros y artículos científicos que han permitido ampliar la visión de la problemática propuesta.

del café se consolida a través de unas elites rurales particulares, El Salvador confirma ciertos avances importantes que hacen pensar que el desarrollo del país es imposible de detener. No obstante, la crisis económica de 1929 pone al descubierto una situación particular para todos los países latinoamericanos. En lo que Víctor Bulmer-Thomas llama, la lotería de los bienes², los países latinoamericanos evidencian severas crisis después de 1930. La fuerte dependencia de la exportación de un producto (el caso de cobre en Chile por ejemplo o el café en El Salvador y Colombia) hace que apenas los precios internacionales se desplomen las economías nacionales pierdan rentas significativas que llevan a crisis económicas imposibles de detener.

La crisis de 1929 echa por el piso cualquier avance de la región centroamericana. A partir de 1930 comienzan a instalarse gobiernos de mano dura de tendencia conservadora. El tímido pero destacable desarrollo de estos países que habíamos mencionado sufre un deterioro, privilegiando procesos de corte autoritario (Rouquié; 1994).

La lógica económica que se aplica en El Salvador a principios del siglo xx y durante tres décadas es la de cultivar de forma intensiva el café. Esto se efectúa a costa de ir erradicando producciones de suma importancia para los campesinos, tales como el frijol y el arroz. Muy rápidamente, El Salvador terminó importando estos productos de México, con el fin de darle plena vía a la producción de café (Venturini; 1986). En el modelo que se comienza a consolidar, los campesinos serán víctimas de considerables abusos por parte de los propietarios de las haciendas. El cultivo del café comienza a reali-

2 El autor argumenta que cada país posee un bien que explota a profundidad (cobre en Chile, café en Colombia y Brasil, guano en Perú, petróleo en Venezuela, etc.). Esta dinámica vincula a los países en un proceso de mono producción y los hace más vulnerables ante el mercado externo. Esto le pasa igualmente a El Salvador al depender de manera extrema del comercio del café. Ver: Bulmer Thomas, *Historia económica de América Latina*, México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

zarse de forma intensiva en el país. La economía se va a volcar en dicho producto. En ese contexto los campesinos se van convirtiendo en las principales víctimas de las nuevas dinámicas económicas. En El Salvador se comienzan a construir relaciones entre propietarios y trabajadores muy violentas y opresivas. Es de esta forma como comienza a consolidarse un conflicto social de consecuencias desastrosas para el país.

Esta situación de explotación rural está patrocinada y coordinada por la poderosa Asociación de Cafeteros que se convierte en el poder detrás del poder en El Salvador. Los miembros de esta agremiación controlan, ya para 1930, todo el proceso de producción que incluye plantación beneficio y exportación. Además de ello, los miembros de la asociación poseen un número significativo de tierras en el país (Almeida, 2011).

Para el momento de la crisis de 1929, el café representaba el 93 % de las exportaciones del país (Touraine, 1988, 50). De tal suerte El Salvador resultó ser el país más afectado de la región (Thomas, 1998). Para comienzos de los años 1930, la situación social es explosiva como consecuencia de la crisis económica y los abusos de la elite económica sobre las masas de campesinos. Es en este instante que comienza a tomar fuerza el Partido Comunista Salvadoreño y gracias a él surgen en diversos puntos del territorio nacional. A partir de la década de 1930 los militares salvadoreños (así como la policía especialmente rural) comienzan a tener un rol cada vez más preponderante en materia de orden público. Con el apoyo de los grandes hacendados y las elites civiles, Policía y Ejército (jóvenes y frágiles instituciones) comienzan a financiar y alentar la represión masiva de campesinos a los cuales se les empieza a señalar de vínculos con el Partido Comunista.

Para finales de 1931, el general Hernández Martínez consuma lo que la mayoría de la población ya supone. El poder presidencial

pasa a manos de los militares gracias a la iniciativa y al temor de una oligarquía que ve con preocupación el ascenso de la protesta social, especialmente campesina. Al año siguiente El Salvador registró más de 30 mil asesinatos de líderes campesinos dentro de los cuales se destaca el conocido líder Farabundo Martí quien se convertiría en mártir e insignia de los procesos revolucionarios en el futuro (Almeida, 2003). El gobierno del terror del general Hernández se extiende de esa forma por 13 años consecutivos, con el apoyo regular de una oligarquía concentrada en la producción de café. No obstante, este apoyo no será duradero y para mediados de la década de 1940 los amigos de ayer se convierten en los enemigos del presente. Esto se verá acompañado así de una dramática caída de la imagen debido al manejo erróneo de políticas sociales y económicas.

La caída de Hernández no supuso la construcción de una democracia nueva. Por el contrario, ante la caída del general y dictador, lo que se confirma es la fuerte presencia de los militares en el poder por las décadas a venir. Hasta los años 1980, los militares son parte fundamental del poder político en El Salvador. Hacia 1960 los golpes de Estado se suceden uno tras otro. De juntas cívico-militares a gobiernos *de facto*, El Salvador se debate entre lo democrático y lo progresista (Montobbio, 1999). No obstante, el progresismo en épocas de Guerra Fría era visto simplemente como revolucionario a los ojos de los Estados Unidos.

En pleno furor de la Guerra Fría, y con antecedentes cercanos como el triunfo de la Revolución cubana, la explosión del movimiento guerrillero en el país no se hace esperar. Diversos grupos de orden marxista, así como de origen campesino deciden empuñar las armas con el fin de combatir el sistema. La respuesta de la oligarquía es inmediata y de la misma forma que emergen las guerrillas, emergen igualmente los grupos paramilitares asociados con la oligarquía y la Policía Rural. Es de destacar la acción en el territorio

salvadoreño de la organización Orden y Democracia (orden). Esta organización armada de carácter paramilitar persiguió y asesinó sin ningún tipo de proceso a cientos de campesinos salvadoreños en la década de los años 1970, conformando un importante número de escuadrones de la muerte.

Además de este complejo contexto en el sector rural, se debe añadir la instalación de fábricas de textiles norteamericanas en El Salvador³. No obstante, estas fábricas solo cumplían el rol de explotación de mano de obra local, ya que la tecnología y la maquinaria eran de los propietarios, que en la mayoría de los casos eran extranjeros.

Así, tanto producción agrícola como industria extranjera, movilizaban las economías nacionales siempre bajo el manto de gobiernos flexibles ante el capital extranjero e implacable, frente a sus nacionales. En este marco, las condiciones de trabajadores urbanos y sobre todo campesinos continuaban siendo deprimentes. Para finales de los años 1970 la pobreza afectaba al 68 % de los salvadoreños (Grenier, 1994). De esta forma se efectuó una mezcla explosiva que combinaba progreso económico para las elites, con miseria social para el grueso de los habitantes. Los campesinos y trabajadores urbanos eran conscientes de que la mayoría de los beneficios se los llevaban las élites nacionales y extranjeras, dejando poco o nada para los trabajadores. Es allí donde la revolución comienza a tomar cada vez más sentido.

Es entonces dentro de todo ese marco de violencia social altamente polarizado que nos acercamos a 1979. Este año es un punto de quiebre no solamente para El Salvador sino para la región cen-

3 Si bien este fenómeno fue bastante marcado en El Salvador, los demás países de la región también vieron la extensión de este fenómeno. Estas maquilas hacían usufructo de una mano de obra barata para rentabilizar al máximo las ganancias. La instalación de estas fábricas no representaba ningún beneficio para las sociedades receptoras ya que los beneficios huían del país y en términos de ciencia, tecnología o desarrollo no se percibía ningún impacto para los países centroamericanos.

troamericana. En medio de un ambiente supremamente complejo, el país se prepara para momentos oscuros y catastróficos. En la década siguiente se abre sin merced uno de los conflictos más violentos de la región en la fase final de la Guerra Fría. Los campesinos son las principales víctimas en un país eminentemente rural. A la miseria y pobreza de esta población se viene a sumar un conflicto armado de proporciones mayores. De igual forma se concibe que desde finales del siglo xix la situación para los campesinos es más que desfavorable y que la represión se ha convertido en norma en un país altamente jerarquizado dentro de un modelo elitista supremamente desequilibrado.

El Salvador se ve inmerso de esta forma en un conflicto armado con carácter de guerra civil que se extendería por más de una década, en el que se enfrentaron dos grandes fuerzas: por un lado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante fmln o Frente) y por otra parte las Fuerzas Armadas, asociadas indudablemente a las elites políticas y económicas del país. En esta guerra civil decenas de miles de muertos (en su mayoría campesinos, estudiantes, trabajadores y algunos sacerdotes) pagaron el precio de un sistema político y social totalmente desequilibrado como consecuencia de un modelo inviable de dominación y subyugación (Bataillon, 2003).

El balance luego de 10 años de violencia exacerbada entre las partes es que no existen ni vencedores ni vencidos. Dentro de esta lógica y ante el inminente fin de la Guerra Fría, las partes deciden ir a la mesa de negociaciones en busca de una posible paz que le devuelva el rumbo a El Salvador.

Esperanzas de paz en el apogeo de la Guerra Fría: la negociación del cese del conflicto⁴

Desde el inicio mismo de la Guerra en El Salvador se buscaron aproximaciones para llegar a un acuerdo de paz. La comunidad internacional, en especial la Unión Europea, los países vecinos, destacando los Gobiernos de Cuba y México, no ahorraron esfuerzos para encontrar el camino de la anhelada paz. No obstante, el Gobierno salvadoreño fue claro en decir que mientras el Frente tuviera las armas y asediara a la población, no habría espacio a negociación alguna (Garibay, 2003). Desde luego, esta postura tanto del gobierno de José Napoleón Duarte (1984-1989) como de Alfredo Cristiani (1989-1994) venía alentada por las fuerzas armadas que veían en el Frente su más acérrimo enemigo. De igual forma se encontraban las elites económicas que no veían posible ninguna salida negociada al conflicto. De esta manera, los gobiernos asimilaban que una negociación de paz con “delincuentes” era absolutamente inviable. De allí la necesidad de entregar de forma incondicional las armas.

Toda la administración Duarte se desperdició en acercamientos fallidos. De forma intransigente el Gobierno decidió apostarle a la guerra y no negociar con el Frente en tanto que este tuviera las armas. La presión de empresarios, militares y los Estados Unidos (bajo la administración Reagan), hacían difícil salir de esta receta para cualquier gobierno.

La Comunidad Internacional tuvo permanentemente un papel significativo dentro del proceso de paz de El Salvador. Pero el más

4 Esta sección hace parte del trabajo de campo efectuado por el autor. En diciembre de 2014, se llevó a cabo un viaje a El Salvador para poder entrevistar diversos personajes y actores partícipes del conflicto y de la negociación. Se resaltan aquí las entrevistas a Salvador Samayoa, representante del Frente en las negociaciones y Óscar Santamaría, representante del Gobierno Cristiani en las mismas negociaciones. Se hace un agradecimiento especial al Embajador de Colombia en El Salvador, Julio Aníbal Riaño por los buenos oficios y las gestiones para llevar a cabo estas entrevistas.

interesante de todos es el papel de los países de la región. Contadora⁵ y el Grupo de Apoyo buscaron permanentemente una salida a los conflictos de la región. Sin embargo, siempre se cuestionó la autoridad de los países miembros para intervenir en los conflictos de América Central. Aun así, Contadora y el Grupo de Apoyo⁶ son el precedente directo del Grupo de Países Centroamericanos liderado por Óscar Arias quien buscó una solución desde adentro (Rouquié; 1994).

La búsqueda de la paz fue en fin de cuentas un proceso largo y dispendioso. Para lograr sentarse en la mesa de negociaciones a partir de junio de 1990 fue necesaria la participación de la onu. El diálogo permanente con el Gobierno y el FMLN fue relevante, prolongado, frágil y delicado. Sin esta intervención hubiera sido aún más complejo⁷. Se puede concluir entonces que la Comunidad Internacional terminó por ser definitiva en todo el proceso de búsqueda de la paz en América Central.

Evidentemente Estados Unidos cumple un papel determinante en el análisis del conflicto salvadoreño. Durante los ocho años de la administración Reagan, se destinaron más de 3 mil millones de dólares en temas militares para la lucha contra la guerrilla otorgando magros resultados y dejando un elevado balance en materia de violación de Derechos Humanos (Montobbio, 1999). El giro más significativo lo va a enunciar la llegada de George Bush a la Casa Blanca (1989-1993). A pesar de ser republicano, la política hacia El Salvador se distanció mucho de la de Reagan y se tendieron puentes para incentivar una salida diferente a la militar. Esto, desde luego, sin llegar a aprobar *de facto* las acciones del FMLN.

5 El grupo de Contadora fue una iniciativa desarrollada en 1983 por México, Colombia, Panamá y Venezuela quienes buscaban una salida negociada a las cruentas guerras civiles de América Central. Aunque fracasó en su intento y objetivo, Contadora se convirtió en el primer ejercicio e iniciativa latinoamericana sin la presencia de Estados Unidos, excluido de forma deliberada por considerarlo parte del conflicto.

6 El Grupo de Apoyo de Contadora fue la anexión de países como Perú, Argentina y Brasil en 1985 quienes saludaban la iniciativa de paz en América Central.

7 Salvador Samayoa, entrevista con el autor. San Salvador, 9 de diciembre de 2014.

La administración Bush dio un importante guiño al proceso de paz en El Salvador distanciándose de la intransigencia de Reagan. No obstante, conforme pasaban los meses, la paciencia se fue agotando. Fue necesaria la pericia de la onu, especialmente de su secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, para evitar el fracaso del proceso. Al final, fue en la ciudad de Nueva York donde se dieron los avances más importantes de la negociación. Esto confirmó una vez más la relevancia e importancia del factor internacional en el proceso.

El caso salvadoreño es, dentro del derecho internacional, un caso *sui generis* dado que la ONU promueve la paz en caso de conflictos internacionales mas no de conflictos internos. En realidad influyó decisivamente la voluntad del secretario general Pérez de Cuéllar. Sin embargo, el apoyo y la confianza de las partes no fue automático. En un principio, el propio FMLN era escéptico de las capacidades y garantías representadas por la ONU.

No obstante, importantes eventos sucedidos en muy pocos días a finales de 1989 en El Salvador cambiaron las dinámicas y apreciaciones del proceso de paz. En lo que se dio a conocer por los guerrilleros como operación «hasta el tope», el Frente desarrolló una estrategia militar sin parangón hasta ese momento. En primer lugar se dio la ofensiva militar del 11 de noviembre por parte del fmln. Durante dos días ininterrumpidos asediaron de forma significativa las tropas del ejército salvadoreño. Cinco días después, el 16 de noviembre, 6 sacerdotes jesuitas (5 de ellos españoles), fueron asesinados en las instalaciones de la Universidad Centroamericana uca. Dentro de los asesinados se encontraban el rector y vicerrector de la universidad. Acusados de ser impulsores de la guerrilla en El Salvador, el ejército actuó de forma brutal en su desaparición y respondía de esta forma a las acciones del fmln. Este evento tuvo un impacto muy fuerte tanto a nivel nacional como internacional

y llevo a replanteamiento de la necesidad de impulsar los diálogos de paz. La noticia del asesinato de los jesuitas no había sido aún digerida cuando un avión de matrícula nicaragüense se accidentó en territorio salvadoreño. Se descubrió que este avión llevaba misiles anti aéreos de largo alcance y que estaban destinados al FMLN. Este descubrimiento permitía pensar que la guerrilla estaba muy lejos de sentirse derrotada. Acto seguido se dio el asalto y toma del prestigioso hotel Sheraton en el cual se encontraban por esos días alojados el secretario general de la OEA y destacados oficiales del Ejército de los Estados Unidos. En las siguientes horas se lleva a cabo un asalto a los barrios más prestigiosos de San Salvador y allí, nuevamente, ciudadanos norteamericanos, así como importantes empresarios del país resultaron víctimas de dichos asaltos⁸.

El coctel estaba más que listo para una explosión de orden social, político y militar. En los pocos días del mes de noviembre de 1989, tanto El Salvador como el mundo entero comprendieron la necesidad de una salida negociada del conflicto. La vía militar no era definitivamente la solución a la problemática. Durante la década de los ochenta se aumentó el pie de fuerza militar y se entrenaron a los oficiales de la fuerza armada. Con todo el apoyo posible por parte de los Estados Unidos, se hizo evidente que no era suficiente para encontrar pronto un vencedor en esta desgarradora guerra.

Toda esta serie de eventos cambió tanto la dinámica del conflicto, como la iniciación de un proceso de paz incluyendo la intervención de la ONU. En el primer trimestre de 1990 se hacía evidente que el camino de la paz sería tortuoso y que los enemigos de la paz serían más abundantes de lo que se imaginaba. Las tensiones entre el Gobierno de El Salvador y el Frente estuvieron siempre a la orden del día. El punto más significativo de las discusiones era la participación directa o indirecta del secretario general de las Naciones Unidas

8 Samayoa, entrevista con el autor.

en los diálogos. Fue un gran punto a discutir y fundamental en el marco de referencia de los diálogos.

Entre San Salvador, México, Washington y Nueva York, diferentes representantes del Gobierno salvadoreño, del Frente y de las Naciones Unidas negociaron de forma permanente. En medio de esta situación se llevaron a cabo las elecciones del 25 de febrero en Nicaragua. Con la derrota del sandinismo, el Gobierno de El Salvador creyó tener ventajas en materia de negociación con respecto a la guerrilla. Todo el mes de marzo se dedicó a medir ese impacto político. Al final, gracias a un anuncio de tregua unilateral por parte del Frente, se logró aprobar la intermediación directa del secretario general de Naciones Unidas. El 4 de abril de 1990, en Ginebra - Suiza, en medio del escepticismo total de las partes se da la partida oficial de las negociaciones de paz⁹.

Luego de los acuerdos de Ginebra del 4 de abril de 1990, era necesario establecer una primera ronda de negociaciones. Para ello se destinó la ciudad de Caracas, al ser Venezuela uno de los países amigos del proceso. Lo importante en esta etapa era, como en toda negociación, determinar un calendario y una agenda. Por simple que parezca, esto fue más difícil de lo pensado. El Frente no quería un calendario fijo e incluyó en la agenda un punto álgido que hubiera podido representar por sí solo el final de los diálogos: la disolución de la fuerza armada. Toda vez que el núcleo central de las negociaciones de paz fue justamente la desmilitarización del país. Este punto se sustentaba en la idea de que en El Salvador existían tres tipos de policía sumados a las fuerzas armadas que se habían repotenciado como consecuencia de la guerra durante los ochenta. Así, la desmilitarización de El Salvador era en efecto el tema más representativo y complejo de los diálogos. Junto a ello se sumaron aspectos de

9 Óscar Santamaría, entrevista con el autor, San Salvador, 11 de diciembre de 2014.

relevancia tales como la democratización (sistema electoral, sistema judicial, derechos humanos y reforma constitucional).

A pesar de todas las dificultades y diferencias tanto del Gobierno como del Frente, de Caracas emergió un primer acuerdo que trazaba una hoja de ruta para las negociaciones. Se podría decir que fue un mal comienzo con la expectativa de un buen final¹⁰. A pesar de todo y durante el trascurso de las negociaciones reinó la desconfianza en ambas partes que buscaban permanentemente réditos políticos para cada una de las partes.

Desde junio de 1990 hasta enero de 1992 negociaron de forma permanente las partes implicadas (Gobierno y FMLN). Las sedes variaron de forma permanente entre los Estados Unidos, América Central y en el caso suramericano, Venezuela. Los tropiezos eran permanentes al igual que las intervenciones, en especial la del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la ONU con su secretario general. De no ser por estos últimos el proceso hubiera fracasado. Las concesiones fueron múltiples de ambas partes y los enemigos de estas concesiones estuvieron constantemente al acecho.

Finalmente se llegó a un acuerdo *in extremis* el 31 de diciembre de 1991 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La urgencia radicaba en que a la media noche de ese año nuevo terminaba la gestión del secretario general Pérez de Cuéllar. Su intervención había sido tan significativa que su ausencia amenazaba el proceso mismo. El 31 de diciembre de 1991 habían quedado unos acuerdos preliminares. Durante dos semanas había un alto riesgo de que aun pudiera fracasar el proceso. Las amenazas estuvieron a la orden del día y una vez más la Comunidad Internacional y en especial los Estados Unidos apoyaron el proceso y el final del conflicto. Era imposible dar vuelta atrás. Se llegaba al 16 de enero de 1992 como un punto de partida más que como un punto de llegada. La ceremonia del 16 de

10 Samayoa, entrevista con el autor.

enero en el castillo de Chapultepec representaba un evento altamente significativo. Era necesario que hicieran presencia todos los sectores: gobierno, guerrilla, ARENA (coalición política dominante para esa época), partidos políticos, militares, empresarios y Comunidad Internacional.

A pesar de que se destinaron 18 meses así como importantes recursos, los acuerdos del 16 de enero representaban aun un borrador. Se firmaron acuerdos generales, producto de las presiones pero en especial de la prisa que imprimió el secretario general. Así, sobre una base muy frágil se acordaron puntos de base, pero la negociación debería continuar a lo largo de todo el año de 1992. Una situación igualmente particular en la que fue necesaria la negociación después de la negociación. Esta situación lleva a reflexiones significativas si se tiene en cuenta que la firma de la paz debe ser considerada como una etapa más en la construcción de la paz y no el punto de llegada.

La paz después de la paz: más allá de la firma de los acuerdos

A pesar de que los acuerdos de paz fueron firmados a mediados de enero de 1992, se hicieron necesarios 11 meses más de un proceso extremadamente delicado. El desarme y la desmovilización estaban programados en tres fases: junio agosto y octubre (Cardenal, 2006). En cada una de estas fases el Frente demandó permanentemente garantías al proceso. Diferente a otros procesos de paz en otras áreas del mundo, no llevó a cabo en El Salvador una entrega de armas ni de control del territorio en un solo acto. A medida que el Frente iba entregando las armas y perdiendo control territorial, crecía una sensación de vulnerabilidad y desconfianza por parte de los desmovilizados. A esta situación no ayudaba mucho el Gobierno que no desaprovechaba oportunidades para desacreditar el proceso y mostrar al Frente como culpable de las irregularidades del proceso

de desmovilización. En efecto, todo el año de 1992 fue una prolongación de los acuerdos de enero en el castillo de Chapultepec.

Uno de los grandes desafíos para el gobierno de Cristiani (1989-1994) era la férrea resistencia y oposición de importantes sectores de la derecha (elites políticas, militares y empresarios) a cumplir los acuerdos por considerar el Frente como un actor ilegítimo. De allí las permanentes señales de sabotaje al proceso e incumplimiento de los acuerdos. Es importante señalar que el Frente tuvo la madurez y el tacto de no caer en las provocaciones que hacían tanto el Gobierno como los grupos armados y clandestinos de extrema derecha.

Más allá de la importancia de que el Frente entregara sus armas, estaba en juego el tema de que la Fuerza Armada debería hacer lo propio, en especial en asuntos de vital importancia tales como la desarticulación de los escuadrones de la muerte o el desarme de los civiles, especialmente los grupos de autodefensa civil patrocinados por el Gobierno desde la década de los setenta. Allí se pudieron evidenciar importantes focos de resistencia al cambio. No obstante, con el paso de los meses se pudo registrar un paulatino desmembramiento de grupos paramilitares y de los antiguos escuadrones de la muerte.

Una vez más se hace necesario destacar el papel de la comunidad internacional. A pesar de que el presidente Cristiani quiso dilatar el proceso y se valió de estrategias para entorpecerlo, tanto la onu como los Estados Unidos ejercieron una fuerte presión para evitar su fracaso y el incumplimiento de los acuerdos. La negociación con los altas jerarcas militares y un Gobierno de derecha no era, en efecto, una tarea fácil. Luego de cinco décadas de dominio político por parte de los militares, sumado a doce años de guerra civil, esta institución se hacía muy sólida en el entorno social y político de El Salvador. Así surge la pregunta de por qué estos militares aceptan las condiciones de los acuerdos de paz de enero de 1992. Tal vez la respuesta puede hallarse en el hecho de que los militares, responsables de múltiples

delitos y violaciones a los derechos humanos, buscaban impunidad el no señalamiento como responsables de estos actos a cambio de aceptar las condiciones contenidas en los acuerdos de paz (Cordova, 1999). Con el final del conflicto se hacía necesario establecer un nuevo concepto de seguridad, un nuevo concepto de fuerzas armadas y un nuevo concepto de policía. Era necesario redimensionar la idea de para qué sirven y para qué se necesitan las armas y quien debe portarlas. Se hacía imperativo crear una nueva cultura de la seguridad en un contexto en el cual las armas habían sido utilizadas bien para la represión, bien para la defensa de la sociedad.

En efecto, el desarme de las partes, el final del conflicto y el control de las armas fueron los principales desafíos del proceso de paz. Sin embargo, otros aspectos se venían a unir a este complejo y delicado proceso. Dentro de ellos se debe incluir la resistencia a transferir la tierra y a legalizar las ocupaciones. Esto como consecuencia de territorios y zonas que otrora fueran dominados por el fmIn. Entonces, la ocupación de los territorios se convertiría en un desafío mayor en el cual no fue fácil lograr. Junto al tema de las tierras se sumó el tema de las violaciones a los derechos humanos. Una vez terminada de manera oficial la guerra persistió la violencia. Esta se expresa en la delincuencia y los asesinatos en su gran mayoría. A partir de 1993, cuando el Frente ya había entregado sus armas y se había desmovilizado en su totalidad, este factor de violencia e inseguridad amenazaba al proceso en sí mismo. Afortunadamente, los ex militantes del Frente dieron señales de madurez frente a los compromisos adquiridos y evitaron reincidir en los antiguos escenarios de violencia. No obstante, el fenómeno estaba allí y podía complicarse. A esta crítica situación debe sumársele la profunda crisis del sistema judicial. Este sistema es uno de los asuntos pendientes del posconflicto en El Salvador dado que el sistema judicial es completamente obsoleto, anquilosado en viejas prácticas y altamente dependiente del órgano ejecutivo, es decir, politizado. Así se concluye que

sin una justicia real y un proceso de justicia transicional adecuado no se pueden ofrecer verdaderas garantías a la sociedad. Una sociedad que exige justicia en medio de un marco a través del cual no se crea ni siquiera un esquema de justicia transicional (Cardenal, 2007).

Muchas y amplias fueron las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno en lo que concierne a temas de la agenda política y militar. No obstante, fueron escasos los debates de temas sociales y casi nulos los económicos. De esta manera, en las primeras horas de la firma de los acuerdos de paz, mucha fue la expectativa y amplias las esperanzas de un verdadero cambio social. Sin embargo, las esperanzas se fueron desmoronando conforme pasaban los meses y se sucedían los gobiernos. Las raíces del conflicto estaban ampliamente determinadas por las desigualdades sociales y económicas y estas no se modificaron de manera sustancial. Lo que se produjo en El Salvador fue un desencanto de la sociedad misma hacia el pos-conflicto dado que la paz no mejoró las condiciones de vida de sus habitantes¹¹. Se puso en evidencia, de esta manera, una ausencia del Estado y de sus mecanismos a través de los cuales se le pudiera hacer un seguimiento efectivo a la modificación de lo que podríamos determinar como las razones estructurales del conflicto. Encontramos pues que un esquema económico y de amplia desigualdad sumado a la ausencia del Estado y la pobreza representan un contexto sensible a la explosión de todo tipo de violencia. Los conflictos prolongados tienden con frecuencia a reproducir lo que podríamos llamar como ciclos de la violencia. Para el caso de El Salvador tenemos que de una violencia social se pasó a una violencia política, luego una de carácter militar y en la actualidad se vive una violencia de carácter delictivo (Cerbino, 2011). Todo esto en el lapso de algo más de medio siglo. En todas estas décadas de violencia podemos referenciar cómo la violencia se va convirtiendo en un oficio y en un saber hacer. Si bien

11 Álvaro Cruz Rojas, entrevista con el autor, San Salvador, 9 de diciembre de 2014.

esto no aplica para la mayoría del tejido social, sí hace parte significativa de la construcción misma de las relaciones sociales.

En esencia, lograr consolidar verdaderos procesos de paz resulta un desafío de amplia envergadura. Lograr reconciliar a la sociedad y a los actores armados es un proceso que no se puede dejar al azar. Podemos arriesgarnos a decir que en El Salvador luego de la euforia de los acuerdos de paz hubo un desencanto progresivo. El Frente se convirtió en partido político legal y participó en sus primeras elecciones en 1994. Para 2009, el FMLN ganaba las elecciones presidenciales. Pero esto no significa que haya existido en el país un verdadero proceso de reconciliación. Esto tampoco significa que para la mayoría de la población haya habido un cambio importante en las condiciones de vida ni en las oportunidades. Temas tan complejos como el de la desigualdad nunca se solucionaron. Así, se abrió paso una violencia delincinencial que puso de manifiesto los múltiples errores por parte del Estado en la voluntad de darle seguimiento a real procesos de construcción y mantenimiento de la paz.

Con todo esto lo que queda claro es que el trecho que es necesario recorrer luego de los acuerdos de paz es extenso y bastante complejo. Constantemente el proceso se ve amenazado y depende de la voluntad de los actores implicados, así como de la sociedad llevar a buen puerto un cambio estructural en el país que pueda conducir a una cultura y un estado de paz.

El difícil camino de la paz en Colombia

A diferencia de El Salvador, tanto el estallido de la guerra insurgente como las aproximaciones para negociar la paz tardaron mucho más. De igual forma, los actores eran mucho más diversos que lo que se puede registrar en el caso salvadoreño. Mientras que en El Salvador los movimientos armados de izquierda se confederaron en uno solo en 1980, en Colombia no se llegó a esta situación. Tanto

los acercamientos con la guerrilla como las negociaciones de paz se han tenido que hacer en muchas ocasiones de forma bilateral y al caso por caso.

En el desarrollo de los acercamientos para la negociación en El Salvador encontramos un factor determinante: el nivel de derrota del enemigo. Encontramos la necesidad de sentarse a negociar tras una década de combates ya que no es clara la victoria para ninguno de los dos bandos. En efecto, cuando hablamos de negociaciones de conflictos armados, si alguno de los dos bandos se siente con ventaja, o bien negocia de mala gana o bien se siente con una ventaja comparativa en lo que Zartman llamaría «empate militar negativo» (Zartman, 1993). Pero cuando llegamos a un estadio de empate de fuerzas, lo que vamos a encontrar es definitivamente la negociación como respuesta a la incapacidad de derrotar al oponente. Si a ello le sumamos el papel que pueda desempeñar la comunidad internacional tenemos que la negociación se presenta como resultado de una presión política por encontrar soluciones al conflicto.

Para el caso colombiano, tenemos que la sensación de derrota por parte de las fuerzas armadas sobre la guerrilla ha sido variable en el curso de las tres décadas propuestas. En ese orden de ideas los militares han tenido un tono más alto o bajo en la posibilidad de negociar la paz. De igual forma, dependiendo de la administración que se encuentre a la cabeza del Gobierno se ha decidido apartar o mantener a los militares al margen de cualquier negociación. Este carácter le ha brindado o restado seriedad y apoyo a los diferentes intentos por llegar a la paz. En lo que se refiere a los procesos de paz en Colombia, el papel de la comunidad internacional no ha podido ser tan marcado como lo fue en el caso de El Salvador. Para el país centroamericano solo queda claro que sin el papel de la comunidad internacional y especialmente el de Naciones Unidas, el proceso hubiera fracasado. De hecho, más allá de la firma de los acuerdos, la

comunidad internacional tuvo que estar vigilante en aras del cumplimiento de los acuerdos. Para el caso colombiano ha sido más compleja esta situación. Si bien los países amigos y los buenos oficios de países de diferentes regiones han estado a la orden del día, su papel no ha sido determinante y los procesos han tendido a ser más bien endógenos.

Dentro de todo esto debemos claramente concluir que se trata de procesos diversos en contextos diversos. No obstante, el camino recorrido por El Salvador, nos deja importantes lecciones que nos pueden permitir llegar a conclusiones de alto interés para la comprensión de nuestra problemática. El Salvador, al igual que Colombia, vivió varios intentos por establecer un proceso de paz. Como lo relatan los militantes del fmln, la paz se buscó desde el inicio mismo de la guerra. Solo que las condiciones y el contexto internacional lo hacían complejo. Solo por circunstancias ya descritas arriba, es que se pudo llegar a la negociación de 1990 a 1992. Igual suerte vivieron las guerrillas colombianas. Durante tres décadas se han llevado a cabo acercamientos de diferente orden para buscar la paz. Algunas más exitosas que otras y algunas en efecto más pragmáticas y concretas, nos han dejado un saldo tímido en un país que aún no termina su conflicto y prolonga la creación de heridas sociales de difícil cura y sanación.

Tres décadas tras la búsqueda de la paz en Colombia

Casi dos décadas después de que iniciara una nueva fase de la violencia y el conflicto en Colombia, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) decide poner en marcha un ambicioso plan para acabar con la violencia y desmovilizar las guerrillas. En efecto, la paz se había convertido en uno de los temas centrales de las agendas tanto de campaña como de Gobierno desde la misma década de los setenta. A partir de los ochenta no habría un solo candidato ni presidente

electo que no tomara el tema de la paz como línea central de Gobierno. Desde las primeras horas de la administración Betancur, en 1982 y luego de un cuatrienio bastante álgido y complicado dirigido por el ex presidente Julio César Turbay, el gobierno conservador de Betancur buscaba pasar a la historia como la administración que consolidó la paz.

En un proceso extendido en un primer momento al M-19, allí se unieron rápidamente el Eln, las Farc, el Epl y Ado. Sin embargo, múltiples serían las problemáticas que afrontaría el proceso. Podríamos afirmar que el país anhelaba la paz pero sus elites no estaban preparadas para el perdón y la reconciliación. Es justo decir igualmente que las guerrillas no tenían un verdadero espíritu de negociar la paz y buscaban más bien entender los diálogos como un escenario político adicional en su lucha doctrinaria e ideológica. Con los últimos coletazos de la Guerra Fría, y la nueva política de *Roll Back* de la Casa Blanca, el proceso de paz afrontaba innumerables desafíos. El presidente Betancur fue caballero solitario en su búsqueda de la paz (Ramírez y Restrepo, 1988). Ante la falta de voluntad política de las partes, el presidente se fue encontrando solo en sus objetivos. Sus malas relaciones con los militares no hicieron más que complicar la situación. Luego de varios meses de negociación el país se hallaba en un ciclo de violencia más fuerte que el que se evidenciaba al inicio de los diálogos. El crecimiento del narcotráfico, el desarrollo de importantes emporios de las mafias, el auge de los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte y la toma del Palacio de Justicia, dejan un saldo en rojo en el cual, el presidente Betancur no puede más que reconocer la derrota. Este primer acercamiento y exploración hacia la paz debería dejar múltiples lecciones y enseñanzas para el país.

El incremento de la violencia durante la primera mitad de la década de los ochenta llevó a la administración de Virgilio Barco a actuar con más prudencia. Esta prudencia radicaba especialmente

en abandonar los planes ambiciosos de Betancur quien en ultimas negociaba con las guerrillas reformas estructurales de fondo. Barco, dentro de una visión más pragmática (pero no por ello mejorada) planteó a las guerrillas un desarme y una desmovilización sin lugar a añadir nuevos puntos en la agenda (Pardo, 1996). En todo caso, el narcoterrorismo le había robado todo el protagonismo a la violencia guerrillera. De tal suerte que dejaron de ser una prioridad. De este proceso solo se hizo efectiva la desmovilización del M-19, que se convertiría rápidamente en un partido político y participaría en las elecciones de 1990 con resultados nada despreciables para una tercera fuerza en el apogeo del Frente Nacional.

La dinámica de negociación entre 1989 y 1990, en pleno derrumbe del conflicto ideológico internacional, continuó bajo el mandato de César Gaviria. Este último logró negociar, en condiciones muy similares a las del M-19, con el Epl, el Quintín Lame y el PRT (García, 1992). Las negociaciones fueron relativamente rápidas a tal punto que el presidente les aseguró una curul a sus militantes desmovilizados en la Asamblea Nacional Constituyente que ejercería funciones a partir de febrero de 1991. En lo que concierne a las Farc y al Eln, los fracasos fueron más abundantes. Estas dos guerrillas se rehusaron a negociar en las mismas condiciones de sus antecesores. Ellos consideraban que su capacidad política y militar, al igual que su presencia territorial, les daba plena legitimidad para hablar de zonas de despeje y así abrir paso a las negociaciones. Cuando las ambiciones de las guerrillas se develaron fracasaron los acercamientos e inició la escalada militar en la cual las guerrillas pusieron de manifiesto un importante potencial militar. El gobierno de Gaviria cerró su administración en un contexto en el cual la solución militar era la única alternativa. No obstante, las capacidades de las Fuerzas Armadas, más allá de su importante experiencia en la lucha contrainsurgente, eran insuficientes para las necesidades del conflicto irregular que se estaba llevando a cabo.

Las iniciativas y acercamientos para buscar la paz se eclipsaban cada vez más. Era una llama que languidecía con el tiempo. Durante la administración Samper no se logró ningún resultado efectivo (Chernick, 2012). Samper desde un comienzo expuso la importancia de una salida negociada. No obstante, no dió muestras efectivas de esta intención. El fortalecimiento del paramilitarismo y el proyecto de las cooperativas de seguridad, «Convivir», eran una muy fuerte contradicción con sus intenciones. Adicional a ello, los escándalos que lo vinculaban a él y a su campaña con dineros del narcotráfico, lo deslegitimaron como interlocutor frente a las guerrillas que rechazaban abiertamente negociar con un presidente que no representaba, de acuerdo a ellos, el sentir nacional.

La dinámica que se reproduce durante la década de los noventa es la potencialización militar de las Farc. Esto se logra como consecuencia de los nexos establecidos entre esta guerrilla y el negocio del tráfico de drogas. Así tenemos que la negociación con esta guerrilla se hacía más compleja al ser un actor con un músculo militar y económico más amplio. De hecho, esto se va a demostrar al alba del siglo xx a través de los múltiples ataques y derrotas a las fuerzas armadas. Así se llega a la zona de despeje alentada por el presidente Andrés Pastrana que va a funcionar por cerca de tres años demostrando magros resultados y con consecuencias más bien negativas para el país. La sensación de la población era de impunidad al ceder tanto territorio a los guerrilleros. El proceso fue perdiendo legitimidad en tanto que la guerrilla asestaba cada vez más golpes certeros tanto a la población civil, como a las Fuerzas Armadas. De igual forma, la modalidad del secuestro fue despertando una indignación cada vez mayor en el país. Por otra parte se aplicaba con todo rigor en Colombia el Plan Colombia; la mayor ayuda militar nunca antes recibida para el combate del tráfico de drogas y esto incluía, desde luego, la lucha contra la guerrilla. Entonces se desarrolla un proceso que buscaba la paz en medio de una feroz violencia. Como si esto

fuera poco, el fenómeno del paramilitarismo había aumentado de una forma exponencial. Colombia vivía los peores momentos de su historia contemporánea víctima y presa de las lógicas de una violencia en mutación.

Para inicios del siglo xx, durante las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe, la negociación sería tomada como un último recurso. Confiados en que la solución era militar y que la zona de despeje había sido una burla al país, la administración Uribe partió de la tesis –muy similar a la del entonces ministro de Defensa del presidente Gaviria, Rafael Pardo– que para sentar a la mesa de diálogo las Farc era necesario primero realizar contundentes golpes militares. Es decir, la posible sensación de derrota podía llevar a la guerrilla a una posición menos arrogante que lo vivido durante la última década. Lo cierto es que en los ocho años del gobierno Uribe no hubo diálogo posible con las Farc ni con el Eln. De hecho, el ambiente político se polarizó de forma considerable y el apoyo popular al presidente brotó como consecuencia de la fatiga de la sociedad de una guerra tan extensa e inmoral. En efecto se realizaron desmovilizaciones por parte de algunos cuerpos paramilitares. Sin embargo, esto no fue una medida contundente para dar salida al fenómeno de la violencia. La entrega de las cabecillas de las autodefensas solo abrió paso a que los mandos medios se apoderaran del negocio de la violencia y el narcotráfico instaurado por sus antecesores.

De esta manera se saldó con balance negativo la búsqueda de la paz. Tres décadas y seis gobiernos se sucedieron en la idea de poder darle fin al conflicto. De negociaciones amplias a persecución militar, cada gobierno soñó con pasar a la historia por haberle dado la paz a Colombia y el final de un conflicto extremadamente prolongado. Múltiples factores tanto endógenos como exógenos pueden explicar esta situación. Lo cierto es que la tarea continua pendiente y como se ha señalado constantemente, el objetivo final no es la fir-

ma de la paz sino la consolidación de la misma. Menuda tarea que requiere sin duda alguna un compromiso colectivo de la sociedad colombiana.

A modo de conclusión: lecciones y experiencias a través del caso salvadoreño

El caso de El Salvador, su conflicto, su proceso de paz y todas las construcciones sociales y políticas posteriores a la firma de la paz pueden llenar de múltiples y ricos análisis el caso colombiano. En efecto, entendemos ampliamente que cada caso y cada coyuntura son diferentes. No obstante, las experiencias internacionales pueden ser de gran utilidad para comprender y eventualmente mejorar las cosas que se llevan a cabo de forma interna. El aspecto por el que quisiéramos comenzar es el del factor internacional. Como se ha señalado con insistencia, el factor internacional fue fundamental en la firma de la paz en El Salvador. La determinación del secretario general de Naciones Unidas por sacar adelante el acuerdo se evidenció cada segundo. Negoció palmo a palmo con los actores y no escatimó esfuerzos en convocar las fuerzas y recursos necesarios cada vez que el proceso se empantanaba. Al mismo tiempo desempeñó funciones de árbitro y juez y al final del proceso de garante del cumplimiento de los acuerdos. Para el caso colombiano las cosas han sido muy diferentes. En todos los casos de negociación la alternativa ha sido más bien endógena. Si bien, la comunidad internacional ha presentado buenos oficios, Colombia y sus gobiernos han sido renuentes a la presencia de actores internacionales en las negociaciones. Esto presenta una gran complejidad y es que ser juez y parte no siempre es conveniente y tal vez este haya sido uno de los factores que más ha influido en el fracaso de algunas de las negociaciones en Colombia. De no haber sido, para el caso de El Salvador, por la persistencia de la onu y su secretario, el proceso de paz hubiera fracasado sin duda alguna. Este factor fue determinante y en Colombia nunca se ha te-

nido en cuenta. Tal vez es por allí por donde múltiples fracasos han llevado al final de los diálogos.

Otra diferencia significativa entre los casos de El Salvador y Colombia es, de una parte, el contexto internacional y de otra parte el orden del actor con el cual se negocia. Es decir, no es lo mismo negociar en el apogeo de la Guerra Fría que en el esplendor de un modelo globalizado y financiero. Esto tiene importancia significativas pues el final de la Guerra Fría marcó los espíritus del fmln y los alentó a negociar al entender el fin de los bloques internacionales. Tal vez esto ayudó de igual forma a la desmovilización de algunas guerrillas en Colombia entre 1989 y 1991. Pero el factor de importancia aquí, es que se trata de un actor de una u otra forma político. Es decir, que en la mesa de negociación entre El Salvador hablaban una guerrilla que reclamaba reformas de fondo para intentar acabar con las raíces del conflicto y por el otro lado, un gobierno que representaba las elites políticas, económicas y militares que habían dominado el país por décadas. Al final de cuentas se trataba de un conflicto político.

En el caso colombiano, la ecuación se hace mucho más compleja dado que el conflicto fue presentando transformaciones estructurales. Esto en la medida que la guerrilla adoptó y apoyó el negocio del narcotráfico dio un vuelco significativo a sus objetivos políticos iniciales. El poder financiero otorgado por el tráfico de drogas a la guerrilla no solo le dio la posibilidad de ampliar su base militar sino que los alejó de los objetivos estratégicos iniciales de su organización. En esa medida, negociar con un actor político, como fue el caso del Gobierno salvadoreño y el fmln fue relativamente más fácil que negociar con un actor militar y económico de orden mafioso como es el caso de las Farc con los diferentes gobiernos del momento. Lo que es claro, es que mientras persista el negocio del narcotráfico y que este se filtre en las filas de la guerrilla, la posibilidad de

negociación y de desmovilización se hace más compleja. Es más, las posibilidades de desmovilización también se ven amenazadas pues siempre existirá el riesgo de que facciones disidentes de la guerrilla decidan adoptar la continuidad del tráfico de estupefacientes como modo de vida.

Un elemento clave es tener la idea clara de que se va a negociar. Los diferentes procesos vividos en Colombia demostraron diferentes vías y objetivos de negociación. De alguna manera, las negociaciones que demandaban cambios estructurales de la sociedad fallaron mientras que las negociaciones pragmáticas que hablaban de desarme y desmovilización tendieron a ser más efectivas. Ante la pregunta de qué se negocia, los salvadoreños exigían de igual forma un cambio de fondo en el sistema político y social de su país. En cierta medida la negociación fue exitosa. Si bien los riesgos fueron permanentes, los resultados de la negociación dieron a la final con una reforma constitucional, una remodelación total de la Policía, cambios significativos en la Fuerza Armada, cambios significativos en el modelo político y electoral. Desde luego que quedaron pendientes temas de la agenda, pero el proceso puede calificarse de positivo. Entonces, la salida de una negociación sería que exija cambios de fondo no es del todo descabellada. Podría incluso considerarse necesaria dado que busca combatir las raíces del conflicto. No obstante, negociar estos cambios no siempre resulta fácil y es necesario saber medir y calibrar los cambios a fin de evitar daños colaterales.

El tiempo, aunque no parezca, también es un factor clave en la comprensión de las negociaciones. No solo en términos de los diálogos como tal, sino el tiempo en que ha incurrido el conflicto. Si bien, la violencia social en El Salvador duró décadas, la explosión y finalización del conflicto solo llevó doce años. Desde luego hablamos de un conflicto de alta intensidad con heridas profundas en la sociedad. No obstante, se pudo detener de una manera más bien rápida a través de

la negociación política a pesar de las resistencias que haya podido dar a lugar. En el caso colombiano, llevamos cerca de cinco décadas de conflicto armado (sin tener en cuenta otras fases y etapas de la violencia en el país). Esto quiere decir que cerca de dos generaciones han nacido y vivido bajo la égida de la violencia. Esto genera efectos negativos en términos de heridas sociales y desgaste moral como consecuencia del conflicto mismo. La prolongación del conflicto entra a jugar como un factor negativo dado que sanar las heridas del conflicto llevará mucho más tiempo y generará, desde luego, mayores resistencias, en especial en términos de reconciliación nacional.

Tanto en El Salvador como en Colombia, el fenómeno del paramilitarismo ha hecho presencia. En los dos países, la existencia de estos cuerpos armados al margen de la ley ha sido motivo de preocupación y desde luego ha estado presente en las agendas de negociación de paz. En el caso salvadoreño, la eliminación y desmonte de los escuadrones de la muerte y las organizaciones paramilitares tales como orden, fue un elemento central de negociación. De hecho, era considerado como un factor neurálgico dentro del conflicto armado salvadoreño. De allí la importancia de erradicar el flagelo. Tan importante y sensible era el tema que la guerrilla del fmIn no podía sentir confianza de desmovilizarse y entregar las armas mientras estas organizaciones fueran vigentes y siguieran armadas. Podemos decir que estas fuerzas de carácter paramilitar se fueron desarticulando progresivamente, no sin resistencia, a partir de 1992. Fue un estadio superado. Pero este éxito relativo se debió en gran medida a la conexión directa entre estas fuerzas y el Gobierno, en especial sus Fuerzas Armadas. Así que la desarticulación se debe en gran medida a esta situación. También se debe a que con la desaparición de su alter ego, la guerrilla, su *raison d'être* perdía todo sentido. Para el caso colombiano, cambian un poco las dinámicas. Es válida la demanda de la guerrilla colombiana de que el Estado le ponga atención al fenómeno del paramilitarismo ya que se invocan

las mismas razones que en El Salvador: garantías para los futuros desmovilizados y desarmados. No obstante, en el caso colombiano se presentan mayores complicaciones. De una parte, podemos decir que los grupos paramilitares, al igual que las guerrillas, abrazaron el negocio del narcotráfico y esto ha alimentado significativamente sus organizaciones armadas. En segundo lugar, de forma progresiva estas organizaciones paramilitares se han ido desarticulando de organismos «federadores» del pasado tales como las Auc. Esto hace que los actores a controlar sean más diversos y dispersos a lo largo del territorio nacional. Así mismo; al no ser las guerrillas específicamente el alter ego de los paramilitares, la negociación de la paz y la desmovilización de los guerrilleros no va a incitar automáticamente a los paramilitares a su desaparición al haber cambios significativos en esa *raison d'être*. Por último, los canales de comunicación entre fuerzas paramilitares no son tan evidentes como en el caso de El Salvador. Por lo tanto, ante una orden de dismantelamiento o desarticulación de estas fuerzas, es más dudoso que dicha desarticulación llegue a tener lugar.

Por último, se hace necesario mencionar lo delicado de los escenarios de posconflicto. Con insistencia se ha señalado en este estudio que una de las etapas más difíciles en la construcción de la paz son todos los eventos posteriores a la firma de los acuerdos. Allí, el caso salvadoreño está lleno de lecciones y experiencias que valen la pena ser tenidas en cuenta para el caso colombiano, el cual, al no haber consolidado aun la paz no tiene criterios de análisis. Las primeras semanas posteriores a los acuerdos, nos enseñó la experiencia salvadoreña, son las más delicadas de todo el proceso dado que los enemigos de la paz siempre están al acecho y consideran como ilegítimos los acuerdos.

Con la firma de los acuerdos es necesario tener en cuenta diversos factores. En primer lugar el cese al fuego y la entrega de armas,

es decir, en suma el final del conflicto armado. Parece sencillo en la esencia pero bastante complicado en la forma. En El Salvador, como se mencionó, el desarme llevó cerca de 11 meses luego de la firma de los acuerdos. La desmovilización no fue masiva ni única, sino más bien periódica y paulatina. A pesar de todo ello, en los meses posteriores al desarme, se descubrieron depósitos de armas tanto en El Salvador como en el extranjero. Esto quiere decir que dentro de la desconfianza del FMLN, se guardaron armas en caso de que fuera necesario retomarlas para la lucha.

En segundo lugar, son de alta importancia temas como la reconciliación y el perdón. En El Salvador pasaron muchos años antes de que las elites civiles y económicas aceptaran el final del conflicto. Más duro de avalar la píldora fue el año de 1994 cuando el FMLN participó en las elecciones a Congreso y Presidencia en tanto que partido político. Por años estuvo en el discurso el señalamiento de los miembros del Frente como «comunistas» y se hacía recurrente el recuerdo de las acciones guerrilleras para tachar el nombre de sus militantes. En lo que concierne a excombatientes, fue complejo otorgarles el crédito suficiente para retomar las actividades normales de la vida civil tanto en el campo como en la ciudad. En las reformas a la Policía, la resistencia a la penetración de excombatientes a sus filas estuvo a la orden del día. Pasó más de un quinquenio para que esta situación pudiera cambiar. De igual forma la resistencia de los miembros de las fuerzas armadas al final del conflicto era constante. En pocas palabras aceptar al antiguo enemigo o al antagonista fue tarea sumamente difícil y tal vez es la hora en que El Salvador no ha logrado pasar por completo esta página.

Es de destacar la madurez que tuvieron los excombatientes y reinsertados del FMLN. Las provocaciones muchas y los argumentos para retomar las armas nunca faltaron. Desde luego que se lograron evidenciar casos aislados en los cuales hubo abusos de parte y parte.

Algunos exmilitantes cedieron a las provocaciones. Algunos otros en nombre de la organización cometieron abusos. No obstante, no pasaron de ser casos aislados. En efecto, el Frente entró en profundas contradicciones internas luego del desarme. Pero con todo ello, el retorno a la vida armada nunca volvió a ser opción. Era claro para sus militantes el sentido político y se conectaban con su época al entender que la vía de las armas, como herramienta política, pertenecía al pasado.

Por último, hacemos hincapié en un fenómeno bastante particular que puede llegar a reproducirse en el caso colombiano. Se trata de lo que denominamos la mutación de la violencia. En El Salvador se pasó de una violencia social a una violencia política y posteriormente a una violencia delincuencial. De manera directa o indirecta, las secuelas de una guerra tan cruel se hacen sentir en el presente. Los *modus operandi* de las famosas pandillas salvadoreñas, recuerdan los peores momentos de la guerra civil. En realidad, la falta de seguimiento y la puesta en marcha de políticas públicas adecuadas por parte del Estado para detener los ciclos de la violencia se hizo evidente. Esto ha hecho que el fenómeno haya crecido de forma exponencial y dramática. Esta también ha conllevado a que se haya perdido la fe en el proceso y que el grueso de la sociedad sienta que la paz no cambió en realidad muchas cosas para el país.

En efecto, el caso salvadoreño nos lleva a la necesidad de pensar que contra una cultura de la violencia se imponga una cultura de la paz. Definiendo y recomponiendo los conceptos de seguridad y de defensa. Entendiendo quién debe portar las armas, quién debe poseer, en términos de Weber, el monopolio de la violencia. Entendiendo esta violencia como legítima y aprobada por el conjunto de la sociedad. Es significativo, de acuerdo con la experiencia de El Salvador la necesidad de salir de la violencia como medio de acción política.

Bibliografía

- Almeida, Paúl (2011). *Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010*. San Salvador: UCA.
- Arnson, Cynthia (1999). *Comparative Peace Processes in Latin America*, Stanford University Press, Washington, D. C.
- Baloyra, Enrique (1982). *El Salvador in Transition*, North Carolina University Press, Chapel Hill.
- Bataillon, Gilles (2003). *Genèse des Guerres Internes en Amérique Centrale: 1960-1983*, Paris: Les Belles Lettres.
- _____ (2009), *Amérique Centrale, Fragilité des Démocraties*, Paris : Choiseul.
- Bulmer, Thomas (1998), *Historia económica de América Latina*, México: Fondo de Cultura Económica,
- Cardenal, Rodolfo, González, Luis Armando (2007). *El Salvador: la transición y sus problemas*. San Salvador: UCA editores.
- Castro, Mariano (1983). *Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo*. San Salvador: Universidad Centro Americana.
- Cerdas Cruz, Rodolfo (1998). Desmovilización y fuerzas del orden en Centroamérica. México: *Foro Internacional*, 38, 1, 59-90.
- Cerbino, Mauro (2011). *Más allá de las pandillas: violencias, juventudes y resistencias en el mundo globalizado*, sede Ecuador: Flacso.
- Chernick, Marc (2012). *Un acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá: Aurora.
- Collins, Cath (2008). State Terror and the Law: The (Re) judicialization of Human Rights Accountability in Chile and El Salvador. *Latin American Perspectives*, 35, 5, 20-37.
- Cordova, Ricardo, Benítez, Raúl (1989). *La paz centroamericana: expediente de documentos fundamentales*. México: UNAM.
- Cordova, Ricardo (1999). *El Salvador: reforma militar y relaciones civico-militares*, El Salvador: Fundaungo.

- Dodson and Jackson (1999). Protecting Human Rights: The Legitimacy of Judicial System Reforms in El Salvador. *Bulletin of Latin American Research*, 18, 4, 403-421.
- Fals Borda, Orlando (1975). *Historia de la cuestión agraria en Colombia*, Bogotá, CINEP.
- Galtung, Johan (1989). *Violencia cultural*, Gobierno Vasco, documento n.º 14.
- _____ (1998). *Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Gobierno Vasco.
- Garibay, David (2003). *Des armes aux urnes: processus de paix et réinsertion politique des anciennes guérillas en Colombie et au Salvador*, thèse doctorale, sous la direction de Guy Hermet.
- García, Mauricio (1992). *De La Uribe a Tlaxcala: procesos de paz*, Bogotá, CINEP.
- Gordon, Sara (1989). *Crisis políticas y guerra en El Salvador*, México: Siglo XXI editores.
- Grenier, Yvon (1994). *Guerres et Pouvoir au Salvador*, Laval, Les presses de l'Université de Laval.
- Gutiérrez, Francisco y Ricardo Peñaranda (2009). *Mercados y armas: conflictos armados y paz en el periodo neoliberal*, Medellín: La Carreta Política.
- Krauss, Clifford (1991). *Inside Central America. Its people, Politics and History*, New York: Summit Books.
- Krujtt, Dirk (2008). *Guerrillas: War and Peace in Central America*, London: Zed Books.
- Lafeber, Walter (1984). *The Reagan Administration and Revolutions in Central America*, *Political Science Quarterly*, Spring.
- _____ (1983). *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*, New York: W.W. Norton.
- Licklider, Roy (1993). *Stopping the Killing: how civil wars end*, NY, New York: University Press.
- MacNeil, Frank (1988). *War and Peace in Central America. Reality and Illusion*. Nueva York: Charles Scribner's Sons.
- Mayorga, Román et al. (2014). *El Salvador: de la guerra civil a la paz negociada*, San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador.

- Montobbio, Manuel (1999). *La metamorfosis de pulgarcito: transición política y proceso de paz en El Salvador*, Icaria editorial.
- Morales, Abelardo (1995). *Oficios de paz y posguerra en Centroamérica*, San José, FLACSO.
- Moreno, José David (2012). Conflicto armado e identidad militar en Colombia 1964-2010. En: *Revista de Análisis Internacional*, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 55-74.
- Pardo, Rafael (1996). *De primera mano Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas*. Bogotá: Cerec.
- Ortiz, Roman (2000). La 'salvadorización' de Colombia: riesgos de desintegración nacional. *Política Exterior*, 14, 75, 37-43.
- Ramírez, Socorro, Restrepo, Luis (1988). *Actores en conflicto por la paz: el proceso de paz durante el gobierno Betancur, 1982-1986*, Bogotá: Siglo XXI editores.
- Roett, Ricardo, Smith, Frank (1988). *Dialogue and the Armed Conflict: Negotiating the Civil War in El Salvador*, Washington: Johns Hopkins University.
- Rouquié, Alain (1994). *Guerras y Paz en América Central*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Rovira, Jorge (1996). La consolidación de la democracia en América Central: problemas y perspectivas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua (1990-1996). *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 22, 2, 7-38.
- Samayoa, Salvador (2002). *El Salvador: la reforma pactada*, San Salvador: uca.
- Touraine, Alain (1988). *La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine*, Paris : Editions Odile Jacob.
- Venturini, Eric (1986). *Amérique Centrale: la cinquième frontière?* Paris : La Découverte.
- Wehr, Paul, Lederach, Paul (1991). Mediating Conflict in Central America, in : *Journal of Peace Research*, 28,1.